



Evo Morales en pie de guerra

Con bloqueos de caminos y paros, las organizaciones sociales leales a Evo Morales presionan al gobierno de Luis Arce para que habilite la postulación del líder cocalero a la Presidencia de Bolivia en 2025, pero, sobre todo, para que se levante la causa judicial que tiene al expresidente investigado por trata de personas y estupro. Una acusación que no es nueva, pero que adquiere mayor relevancia cuando el gobierno busca sacar a Morales de la competencia. Y es que en un país donde las instituciones han sido arrasadas luego de dos décadas de hegemonía del MAS—Movimiento al Socialismo—, el funcionamiento de la justicia suele ir a la par con los intereses de quien tenga el poder. Bien pueden decirlo líderes opositores como la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quienes llevan años detenidos sin que aún se inicie el juicio en su contra por su supuesta responsabilidad precisamente en la caída de Morales, en 2019. La paradoja es que ahora es el propio líder cocalero el que se enfrenta al sistema judicial, en momentos en que quien fuera su aliado y exministro, el Presidente Arce, se ha transformado en su mayor enemigo.

Desde el lunes ha habido incidentes violentos en las principales carreteras bolivianas, con enfrentamientos entre manifestantes que dicen defender “la libertad e integridad” de Evo, y policías que intentan levantar las barricadas. Se trata de una guerra política entre los sectores del MAS que se encuentran bajo el control de Arce y los leales a Morales, quien se victimiza, denuncia *lawfare* y saca a sus huestes para conseguir por la fuerza lo que no puede por la vía legal.

A este punto se ha llegado luego de más de tres años de rivalidad entre ambos caudillos. Evo no perdona que el Presidente dejara fuera del gobierno a su gente y permitiera su inhabilitación política. Lo considera un “traidor” e incluso ha dicho que es “de derecha” y “hace todo para cumplir el mandato de la Casa Blanca”. Morales levanta un discurso en el que se identifica a sí mismo como una suerte de encarnación del pueblo boliviano. Como tal, actúa agitando el am-

biente, aprovechando el descontento por la crisis económica que sufre el país—inflación y escasez de dólares, alimentos y combustibles— para promover su objetivo de recuperar el poder.

Pero lo que había sido hasta ahora una lucha entre dos facciones políticas, se ha transformado en una cuestión más delicada para Evo debido a la reapertura de un caso judicial que partió en 2020, cuando se denunció su supuesta relación con una menor de edad, quien en 2016 habría tenido una hija suya, la que está registrada en la localidad de Yacui-ba. Morales fue llamado a declarar, pero no se presentó a la audiencia fijada para el jueves de la semana pasada: consideró que no tenía las garantías para proteger su vida, ante lo cual la fiscal anunció que emitiría una orden de aprehensión para obligarlo a presentarse a la justicia, la que todavía no se concreta. Es improbable que Arce quiera ver a Evo en la cárcel, porque, a

pesar de no tener la capacidad de movilización de antes, el líder cocalero tiene suficiente arrastre popular como para provocar molestos disturbios en distintas regiones. Con todo, el lunes el actual mandatario realizó cambios en la cúpula policial; sería una reacción—se especula— ante lo que habrían sido algunos actos del mando anterior con miras a obstaculizar una eventual detención de Morales

Junto con esta investigación, ha habido otra presentación contra el exgobernante, impulsada por dos diputados que piden reabrir casos de corrupción que habrían quedado impunes, relacionados con el manejo de recursos del Fondo Indígena y contratos adjudicados ilegalmente durante su administración a una empresa constructora china, cuya representante era novia del expresidente. La mujer estuvo en prisión por enriquecimiento ilícito, pero ahora la denuncia va dirigida contra el propio Evo, por daño patrimonial al Estado. Puede que esta presentación no prospere, pero da cuenta del ambiente político revuelto que hay en Bolivia, con una oposición dividida que observa desde los márgenes una opereta en la que dos líderes ideológicamente afines, pero ambiciosos, se disputan el poder sin medir las consecuencias.

En medio de sórdidas acusaciones, dos caudillos ideológicamente afines se disputan el poder sin tregua y sin medir consecuencias.